

### **2.6.1. Especial referencia a víctima menor de edad.**

La víctima menor de edad ve reforzada su protección al interior del proceso penal, desde que se establece un estatuto más amplio sobre sus derechos. Así, se atrae al sistema de justicia penal ordinario, el principio del interés superior del niño, como una guía en la toma de decisiones que hayan de transmitir sus efectos a un niño, en su condición de víctima de un delito. Siempre se ha cuestionado cuál es el significado y alcance del tal principio, y aún cuando ese concepto no puede precisarse con límites claros, la propuesta de definición que hace el Código de Familia cuando menos establece unos parámetros que pueden ayudarnos a reconocer sus alcances. Así, el art. 350 CF, indica que se ha de entender por “interés superior del menor” todo aquello que favorezca su desarrollo físico, psicológico, moral y social para lograr el pleno y armonioso desenvolvimiento de su personalidad”. De tal manera, que al pronunciar una decisión, los jueces siempre han de tomar en cuenta que con ella se esté potenciando el desarrollo de la personalidad del menor víctima, en los ámbitos arriba indicados. Este principio, en todo caso, tiene luego una materialización normativa en la regulación de algunos temas específicos, como la declaración del menor de edad cuya forma de realización se establece en el mismo art. 106.e CPP aprobado, la prohibición de conciliar cuando con ello se afecte ese interés superior contenida en el párrafo final del art. 38 CPP aprobado, o la ampliación del plazo de prescripción a un año más, después de que la víctima menor de edad haya cumplido los dieciocho años, establecido en el párrafo final del art 33 CPP. aprobado y otras.

## **2.7. Actor civil.**

### **2.7.1. La responsabilidad civil como una consecuencia jurídica del delito.**

Es fácil advertir que lo que para muchos supuso una progresión y desarrollo institucional del proceso penal, determinado por la exclusión de la venganza privada y la composición como formas de respuesta al delito y la asunción por el Estado de la administración y solución de ese conflicto a través de un proceso legalmente organizado, para la víctima de aquel delito (y a caso también para el victimario), no fue sino una verdadera tragedia en tanto que se les aparta de la posibilidad de intervenir de manera directa y efectiva en la determinación de las formulas de solución del conflicto que en principio, y salvo los intereses públicos o colectivos que puedan estar comprometidos por el fenómeno de la